

N°11 NOTAS DE POLÍTICA

LA REVOLUCIÓN DE LOS DATOS: DE LA INFORMACIÓN A LA ACCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Autores: Gloria Manzotti¹ y Marcela Smutt²

Esta nota de política se enfoca en la seguridad ciudadana como un derecho humano y bien público centrado en las personas. Busca contribuir a la manera en que se abordan las causas y expresiones de la inseguridad para incidir positivamente en las agendas públicas, el diseño de políticas, las intervenciones y la transformación de las instituciones, a favor de una convivencia pacífica y mejor calidad de vida de las personas. La premisa inicial es que la gestión de la información de calidad es central para cumplir esos objetivos porque evidencia las necesidades reales.

Para graficar el rol gravitante que tiene la información en la seguridad ciudadana, se ha utilizado información del [Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe](#)³, y se ha tomado como ejemplo el trabajo de INFOSEGURA, un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID).

Esta nota de política pone a disposición aprendizajes, metodologías y prácticas innovadoras en torno a la gestión de la información como condición necesaria para la acción institucional de seguridad ciudadana transparente y centrada en las personas.



1 Asesora Regional de Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para PNUD en América Latina y el Caribe.

2 Coordinadora Proyecto Regional INFOSEGURA.

3 PNUD (2020) Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe en: www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/analisis-sobre-innovacion-en-seguridad-ciudadana-y-derechos-huma.html

Principales hallazgos

- » La seguridad ciudadana juega un rol central en el desarrollo sostenible de los países de la región, fortaleciendo o debilitando su democracia y la calidad de su gobernanza, así como en la protección o afectación de los derechos de la ciudadanía.
- » La seguridad ciudadana está relacionada con otros fenómenos como las crisis política, económica y climática, la movilidad humana, o la violencia contra las mujeres y las niñas, entre otros riesgos que afectan directamente a las personas.
- » Se requiere de un abordaje integrado que incorpore los datos tradicionales de delitos, el análisis de la victimización y completar la fotografía con la percepción de la ciudadanía de la inseguridad y de la respuesta institucional.
- » Si bien se registra un descenso sostenido de los homicidios desde el año 2015 para el caso de Centroamérica, persisten desafíos enormes para cambiar tendencias. Por ejemplo, la evidencia muestra que en el 2020 la tasa de feminicidios en Centroamérica y el Caribe fue de 1,52 por cada 100.000 mujeres.

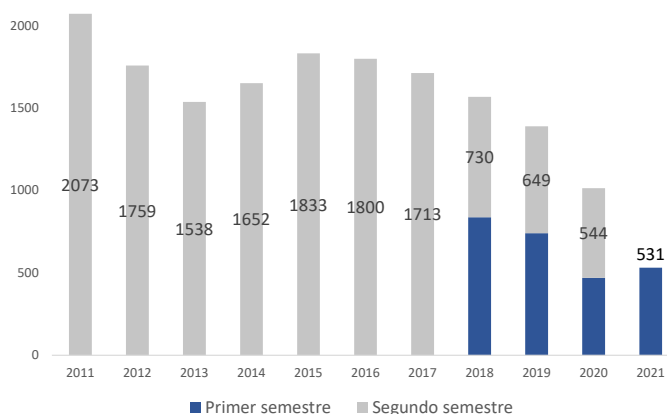
Principales recomendaciones

- » Para que la evidencia sea útil para la toma de decisiones de política pública se requieren datos desagregados e información complementaria que provean una fotografía panorámica de la situación de violencia en un territorio determinado.
- » Robustecer los conocimientos, prácticas y capacidades institucionales para la gestión de la información de calidad impacta en la calidad de las políticas públicas, y potencia las capacidades de reporte y seguimiento del avance de las metas del ODS 16 en los países.
- » Considerar una perspectiva multidimensional, interseccional, intergeneracional y de género en la gestión de la información. Ello habilita la comprensión más amplia de los fenómenos de violencias, sus causas- consecuencias, y permite el rediseño de estrategias de intervención, considerando siempre a las poblaciones más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las mujeres, las niñas y la población LGTBQ.

- » Implementar mejoras a lo largo de la cadena de gestión de la información, así como potenciar su impacto en las políticas y programas de seguridad ciudadana. La planificación estratégica y la gestión de la información son fundamentales para construir sociedades más seguras.
- » Desarrollar procesos de innovación y digitalización, como las herramientas digitales automatizadas y bases de datos integradas, uso de big data y el análisis en tiempo real. Esto es clave para una renovada cultura de la gestión de información.
- » Impulsar políticas de datos abiertos en materia de seguridad ciudadana y justicia en las instituciones, a través de desarrollo y alimentación sistemática de portales y sitios web de las instituciones nacionales.
- » La participación inclusiva de la ciudadanía en los espacios de construcción colaborativa de soluciones potencia la capacidad de las organizaciones públicas y privadas en materia de gestión de información; ecosistemas, innovación y ciencia de datos; interoperabilidad; y, portales de datos abiertos, con el fin de optimizar la toma de decisiones en materia de seguridad, justicia y cohesión social.

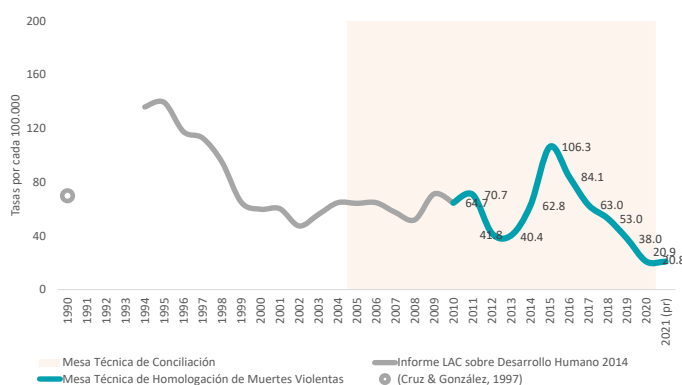
Si bien se registra un descenso sostenido de homicidios desde el año 2015 para el caso de Centroamérica, persisten desafíos enormes para cambiar tendencias. Por ejemplo, desde el 2010 al 2020 el nivel de feminicidios ha bajado sostenidamente en Centroamérica y República Dominicana, como lo muestra la Figura 2. Sin embargo, si vemos el detalle por países, encontramos casos como El Salvador, Honduras y Belize, donde las tasas de homicidios se mantuvieron en más de 20 por cada 100.000 habitantes en 2020 (Ver Figura 3).

Figura 2. Número de homicidios de mujeres en Centroamérica y República Dominicana



Fuente: Infosegura – Tendencia regional de indicadores de seguridad ciudadana – Primer semestre de 2021: infosegura.org/wp-content/uploads/2021/10/ppt_regional_dataccion_7cot21.pdf

Figura 3. En El Salvador la tasa de homicidios disminuye sostenidamente desde el 2015, pero el desafío se mantiene



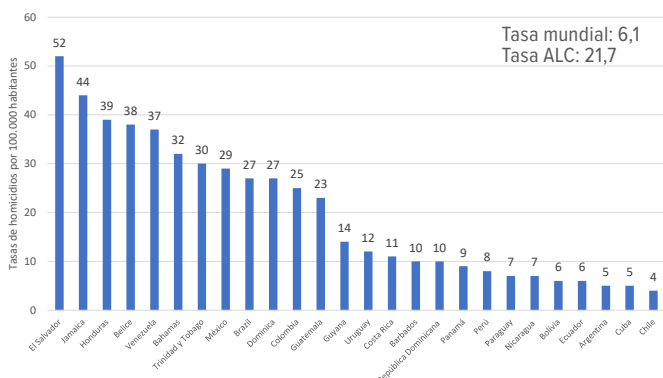
Fuente: INFOSEGURA – El Salvador: análisis de Seguridad Ciudadana al primer semestre 2021

Se suma a este fenómeno el hecho de que la percepción de inseguridad entre la ciudadanía alcanza niveles que impactan directamente en su bienestar. Más del 40% de la población de ALC se siente constantemente temerosa de ser víctima de un delito con violencia (Ver Figura 4) y, si se realiza la comparación con el resto de las regiones del planeta, la población de ALC es la que se siente menos

Introducción

América Latina y el Caribe (ALC) padece desde hace muchos años las tasas más altas de delitos violentos, como son los homicidios y delitos basados en género, del mundo. El reciente Informe Regional de Desarrollo Humano [Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe y el Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe](#) confirma una realidad conocida de la región: con tan sólo el 8% de la población global, la región registra el 33% de los homicidios del mundo, y 17 de los 20 países con las tasas más altas de homicidios son latinoamericanos.

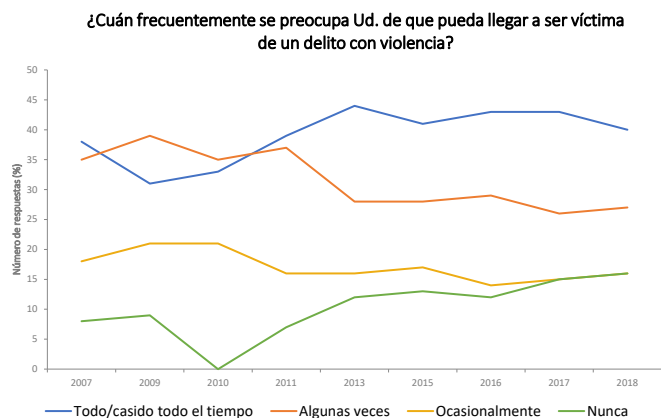
Figura 1. Tasas de homicidio por 100.000 habitantes en LAC 2017 – 2018



Fuente: PNUD (2020) [Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe](#)

segura al salir a la calle⁴. Si profundizamos en el análisis interseccional de estos datos, el impacto diferenciado en la vida de las mujeres salta a la vista: de los quince países que registran mayores tasas de feminicidio en el mundo, ocho son de ALC. Además, si nos enfocamos en la violencia sexual, ALC presenta las tasas más altas de incidencia a nivel global cuando el delito es cometido fuera de la pareja y la segunda tasa más alta cuando la pareja es la responsable⁵.

Figura 4: Temor a ser víctima de un delito en América Latina. 2007–2018



Fuente: PNUD (2020) [Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe](#)

A ello se suma el uso de la violencia como herramienta política o política pública, especialmente en contextos electorales, además de discursos punitivos que creíamos ya superados en nuestra región. Esta situación dificulta profundamente el desarrollo sostenible de los países de la región, debilitando su democracia y la calidad de su gobernanza. Resulta comprensible, entonces, que la seguridad ciudadana sea uno de los temas prioritarios de la agenda regional, así como uno de los principales desafíos para la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre todo luego de la crisis general provocada por la pandemia.

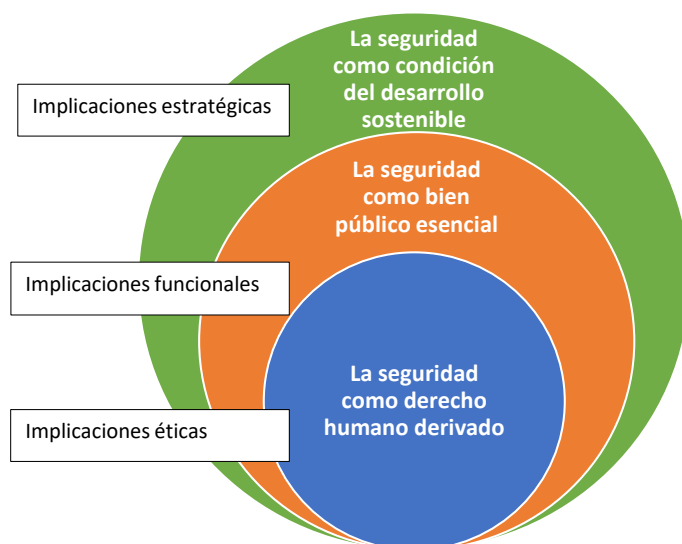
El aspecto positivo es que, como reacción, los países de ALC vienen experimentando desde hace casi tres décadas transformaciones en las formas de abordar la seguridad ciudadana. En la actualidad, se concibe de manera integral, con un énfasis en la prevención y anclaje territorial. Esto ha permitido que se introduzca en la agenda pública la idea de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos, de naturaleza multidimensional, cuya condición de bien público demanda la calidad, transparencia, eficiencia y adaptación a los estándares de una democracia participativa. Ello ha activado ciertos cambios positivos en

materia legislativa, diseños institucionales, formulación de políticas, y en los procesos de formación profesional⁶.

Seguridad ciudadana como derecho humano, bien público y fundamental para el desarrollo sostenible

El artículo 3 de la [Declaración Universal de Derechos Humanos](#) señala que “*Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona*”. Es decir, la seguridad ciudadana es un derecho humano. También un bien público, “*con lo cual tiene implicaciones funcionales sobre las políticas y arreglos institucionales del sector seguridad; finalmente, es una condición fundamental para el desarrollo sostenible, es decir, un habilitador sin el cual no es posible sustentar estrategias de desarrollo exitosas*”. Esta triple dimensión de la seguridad ciudadana se visibiliza en la Figura 5.

Figura 5. Las tres dimensiones de la seguridad ciudadana



Fuente: PNUD (2020) [Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe](#)

En su dimensión de bien público, “*la seguridad ciudadana debe ser de acceso a todos los miembros de una sociedad, sin exclusión, y su administración le compete a la autoridad pública*”⁷, lo que implica la necesidad de diseñar políticas e instituciones que incorporen la perspectiva de prevención, atención, control y sanción del delito. Incidir en esta concepción de la seguridad ciudadana es clave en cuanto esta es una condición fundamental para el desarrollo sostenible; es decir, un habilitador imprescindible para alcanzar estrategias de desarrollo exitosas.

4 Ídem
5 Ídem
6 Ídem

7 PNUD (2020) [Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe](#). P. 23. En: www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/analisis-sobre-innovacion-en-seguridad-ciudadana-y-derechos-huma.html

Características de la seguridad ciudadana como bien público que debe estar centrado en las personas

La seguridad ciudadana como bien público centrado en las personas tiene las siguientes tres características distintivas: la multidimensionalidad, la territorialidad y la intersectorialidad⁸.

La multidimensionalidad alude a la compleja interrelación de los distintos factores que se encuentran en la base de los problemas de la delincuencia y la violencia, y en las dinámicas que se desprenden de ellas. Es decir, los fenómenos criminales y violentos no pueden ni deben explicarse simplemente como el resultado actitudes individuales, sino como insertados en procesos más amplios, complejos y multifacéticos. Es a partir de este reconocimiento que se hace patente la necesidad de que el tema trascienda el ámbito de los órganos de control y sanción como la policía, los sistemas de administración de justicia y el sector penitenciario. En el plano de la acción concreta, se requiere de un trabajo intersectorial que combine las políticas de seguridad ciudadana en su sentido más tradicional con otras políticas de Estado, particularmente las políticas sociales.

La segunda característica, la territorialidad, hace referencia a las condiciones espaciales que demarcan y afectan los fenómenos criminales. Estas, a su vez, demandan modalidades de prevención ancladas en un enfoque territorial, como serían la prevención local, comunitaria y situacional del delito y la violencia. Asimismo, los gobiernos locales, las policías municipales y los representantes a nivel local de las instituciones nacionales o federales, por ejemplo, se vuelven espacios claves para aterrizar las políticas de alcance nacional.

Finalmente, la concepción de la seguridad requiere de un enfoque intersectorial capaz de articular a representantes de múltiples sectores institucionales y sociales. En este aspecto, cabe resaltar el protagonismo cada vez mayor de la sociedad civil. Este se expresa en la manera en que esta plantea sus demandas ante las autoridades públicas, así como también en su activa incorporación en los procesos de toma de decisiones, asignación de recursos, fiscalización y evaluación de políticas y programas. Tomando de referencia estos elementos, la información es clave para redefinir los servicios de seguridad disponibles para la ciudadanía centrándose en la persona.

Dicho esto, la seguridad ciudadana centrada en las personas se desprende de la idea de la seguridad humana, que se construye sobre dos componentes: *“libertad respecto del miedo y libertad respecto de la necesidad”*⁹. Ello implica entender la seguridad en dos sentidos fundamentales: por un lado, pasar de un acento exclusivo en la seguridad

territorial a uno mucho mayor en la seguridad de la población; y, por el otro, pasar de la seguridad mediante los armamentos a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible. En este sentido, la seguridad humana ya no solo se enfoca en la violencia directa, sino que presta atención a los efectos de la violencia indirecta y a elementos subjetivos como la percepción de inseguridad y el miedo.

PNUD asume esta perspectiva de la seguridad ciudadana como derecho humano y bien público centrado en las personas. En este sentido, la concibe como un proceso que permite establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando o reduciendo las amenazas de violencia en la población de una manera que permita una coexistencia segura y pacífica.

Evidencias para la acción

El fortalecimiento de las capacidades para la gestión de información sobre seguridad ciudadana, justicia y cohesión social es crucial para contribuir al diseño y seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia, centrada en las personas, con enfoque de derechos humanos. Esto incluye en particular: (i) el fortalecimiento de las arquitecturas institucionales para la gestión de información sobre seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos; (ii) la implementación de nuevas tecnologías e innovación en los procesos y servicios; y, (iii) la comunicación estratégica y la gestión de conocimiento.

La cadena de la gestión de información sobre seguridad ciudadana cuenta con cuatro eslabones interrelacionados que se fortalecen entre sí en una dinámica que procura la evolución, la institucionalización y sostenibilidad de los procesos: producción de datos, análisis multidimensional, uso en política pública y comunicación estratégica: los datos son un ingrediente básico en la receta para la seguridad y la erradicación de la violencia.

La exploración e implementación de procesos de innovación y digitalización han demostrado ser centrales en la búsqueda de una renovada cultura de la gestión de información. Esto implica eficiencia y eficacia para la generación de información y análisis mediante herramientas digitales automatizadas y bases de datos integradas. La producción de información actualizada y el análisis especializado de la seguridad ciudadana han ayudado a las nuevas autoridades a fortalecer las capacidades de gestión de la información y la respuesta institucional, un proceso que ha sido acelerado por la realidad impuesta por la COVID-19.

En la última década se ha observado una disminución en la tasa de homicidios en Centroamérica y República

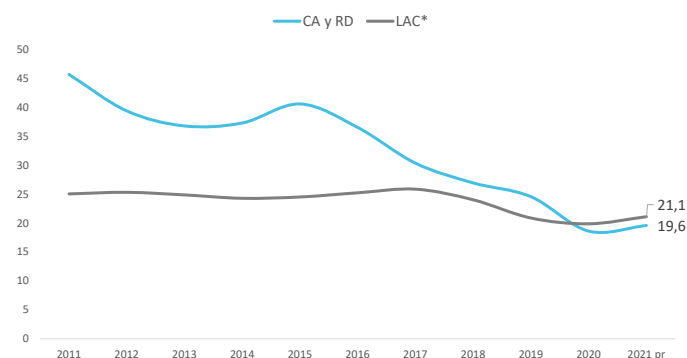
8 PNUD (2020) Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe. P. 23. En: www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/analisis-sobre-innovacion-en-seguridad-ciudadana-y-derechos-huma.html

9 Idem. P. 27

Dominicana. Entre 2015 y 2020, se tuvo una reducción de 51% en el total de homicidios en la región, 48,5% homicidios menos de mujeres y 51,5% homicidios menos de hombres. En 2021 se presentó una caída del 24% en el número de homicidios en Centroamérica y República Dominicana en comparación con el año anterior, no COVID-19, 2019. Las reducciones más significativas fueron en El Salvador (-58%), Guatemala (-25%) y Belice (-20%). De igual forma, se presentaron 29% menos muertes violentas de mujeres y 25% menos muertes de hombres en toda la subregión entre enero y junio de 2021 y 2019 (Ver figuras 6 y 7).

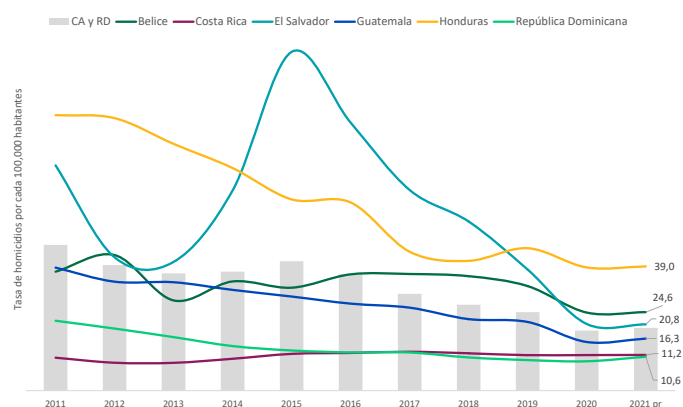
Figura 6. Tasa de homicidios en Centroamérica vs Latinoamérica 2011-2021 por cada 100.000 habitantes

*Proyección de Latinoamérica incluye datos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Uruguay



Fuente: Datos de Belice, BDP (2010-2021); Costa Rica, OIJ (2010-2021); El Salvador, PNC (2010-2013) y DIA - MJSP (2014-2021); Guatemala, INE con datos de PNC (2010-2020) y PNC en proceso de validación por el INE (2021); Honduras, IUDPAS (2010-2012), Mesa Técnica de Muertes Violentas (2013-2020) y datos provisionales de la Mesa Técnica de Muertes Violentas (2021); República Dominicana (OSC-RD) (2011-2021). Presentados durante los Datación del 7, 14 y 21 de octubre de 2021.

Figura 7. Tasa de homicidios por países Centroamérica por cada 100.000 habitantes



Fuente: Datos de Belice, BDP (2010-2021); Costa Rica, OIJ (2010-2021); El Salvador, PNC (2010-2013) y DIA - MJSP (2014-2021); Guatemala, INE con datos de PNC (2010-2020) y PNC en proceso de validación por el INE (2021); Honduras, IUDPAS (2010-2012), Mesa Técnica de Muertes Violentas (2013-2020) y datos provisionales de la Mesa Técnica de Muertes Violentas (2021); República Dominicana (OSC-RD) (2011-2021).

En parte, esto es resultado de la innovación en la recopilación de datos con nuevas tecnologías en procesos y servicios: se integraron bases de datos para la mejora del análisis multidimensional de la violencia; algunos de los ejemplos más representativos son el Sistema Integrado de Información para Políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras, el Sistema Integrado de Información para la Prevención de la Violencia (SIPREVI) en Guatemala, y el Observatorio del Delito de Belice, entre otros procesos y herramientas de gestión implementados en seis países, con 45 instituciones gubernamentales y diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

La tecnología implementada contribuyó a agilizar el intercambio de información, impulsando el trabajo regional, conjunto e intersectorial para generar análisis multidimensional, enfoques regionales en temas como la violencia contra las mujeres, la violencia multidimensional, la prevención integral y la movilidad humana. Así, por ejemplo, sabemos que de los quince países del mundo que registran mayores tasas de femicidio, ocho son de ALC. Además, la evidencia muestra que en el 2020 la tasa de femicidios en Centroamérica y el Caribe fue de 1,52 por cada 100.000 mujeres¹⁰.

En contraste, más de 819 vidas de mujeres han sido salvaguardadas de la violencia entre 2015 y 2020, evidenciando una tendencia a la baja. Entre 2018 y 2021 se ha registrado una reducción de 307 homicidios de mujeres, de 838 en 2018 a 531, en el primer semestre de 2021.

PNUD contribuyó a avanzar en el análisis de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) en Centroamérica y República Dominicana, a través de la generación de indicadores sensibles al género, la ejecución de encuestas de prevalencia de la violencia, la publicación periódica de análisis sobre la situación y la realización de investigaciones especializadas, como el informe regional [La Cara Escondida de la Inseguridad: Violencia contra las mujeres en Centroamérica y República Dominicana](#). Asimismo, se logró estructurar una respuesta ante la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de las medidas de emergencia pandémica mediante una campaña que promueve los servicios de atención por parte de los gobiernos. Se impulsó una campaña de prevención de la violencia contra la mujer en la que han participado instituciones públicas, universidades, sector privado, junto con el PNUD y otras agencias del Sistema.

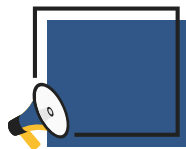
En Honduras, se ha apostado al fortalecimiento de capacidades institucionales a través de programas de formación especializada en gestión de información sobre seguridad ciudadana y género, donde el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) desarrolló e implementó un programa de formación. Los contenidos de

10 INFOSEGURA (2021) Datos, enfoque de género y seguridad ciudadana En: infosegura.org/2021/03/10/datos-enfoque-de-genero-y-seguridad-ciudadana

este programa formativo fueron posteriormente adaptados al Observatorio del Crimen de Belice. Adicionalmente, se desarrolló un índice para el monitoreo multidimensional de la violencia contra las mujeres y las niñas e implementando un piloto. Se realizaron informes periódicos sobre la VCMN para generar conocimiento y conciencia sobre la importancia de este tema.

Un espacio para la conversación activa en torno al conocimiento: los análisis periódicos sobre la situación de seguridad ciudadana en los países de Centroamérica y República Dominicana, elaborados en coordinación con las contrapartes nacionales y diversos estudios sobre el impacto de la violencia en poblaciones vulnerables, destacando el [Análisis de Movilidad Humana, Desarrollo y Seguridad Ciudadana, 2020, Una mirada a las juventudes expuesta a la violencia en el norte de Centroamérica desde la perspectiva de la vulnerabilidad y la resiliencia humana, La cara escondida de la inseguridad: La violencia contra las mujeres en Centroamérica y República Dominicana](#), se convierten en insumos para reflexionar en los seminarios virtuales DatAcción, pasando de los encuentros presencial a los virtuales. DatAcción surgió con tres productos: [DatAcción Webinar](#), un seminario semanal online que registra 3 temporadas, 33 episodios, 2137 asistencias, 56% mujeres, 44% hombres; y 80 panelistas de alto nivel. DatAcción Report, una colección de informes que sistematizan la información proporcionada en los webinars; y DatAcción Highlight, resúmenes informativos en redes sociales para llamar la atención sobre los datos de seguridad ciudadana. También a través de una campaña de comunicación regional con capítulos locales en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Belice, para la prevención de la violencia contra las mujeres.

Con ello, se ha demostrado los beneficios de fortalecer las capacidades nacionales para la gestión de información, la armonización e integración de bases de datos generados por diferentes fuentes y su puesta a disposición pública mediante portales de datos abiertos que contribuyen a la transparencia y a la rendición de cuentas. Todo ello ha impulsado un cambio en la visión de la gestión de la información, al ampliar la mirada desde una lógica de observatorio al análisis multidimensional más amplio y complejo.



Reflexiones finales y recomendaciones

Utilizando como base el aprendizaje y el trabajo de INFOSEGURA y las recomendaciones del [Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe](#), publicado a finales del 2020, estas son algunas reflexiones y recomendaciones finales sobre la importancia de la información en la seguridad ciudadana.

1. Las inversiones de elaboración de indicadores y gestión de datos e información requieren análisis de impacto y de estudios costo/beneficio. Eso implica la mejora de los procesos de gestión por resultados y el diseño de políticas públicas con estándares mínimos.
2. Es necesario implementar mejoras a lo largo de la cadena de gestión de la información, así como entender mejor su impacto en las políticas y programas de seguridad ciudadana. Una institucionalidad más articulada y efectiva, centrada en las personas, requiere de innovaciones y tecnología para mejores ecosistemas de datos.
3. La implementación de procesos de innovación y digitalización, como las herramientas digitales automatizadas y bases de datos integradas, uso de *big data* y el análisis en tiempo real, es clave para una renovada cultura de la gestión de información.
4. Promover una mayor y más efectiva convergencia de estrategias, políticas y acciones entre el sector social y el de seguridad ciudadana. Los espacios de construcción colaborativa de soluciones funcionan.
5. Convertir la información en acción, mediante prácticas que impacten de manera positiva el nivel operativo de la gestión institucional.
6. Ampliar los esfuerzos de promoción de políticas de seguridad género sensitivas de manera que cubran todo el ciclo de la política pública, y abarquen la composición de los órganos de toma de decisiones y del nivel operativo del sector seguridad. Además de los quince países del mundo que registran mayores tasas de feminicidio, ocho son de ALC y, en el 2020, la tasa de feminicidios en Centroamérica y el Caribe fue de 1,52 por cada 100.000 mujeres.
7. La reducción de la violencia y la mejora de la seguridad ciudadana requiere de una aproximación multidimensional para abordar la multiplicidad de

factores que complejizan, reproducen y profundizan dichos problemas sociales. Para ello, es fundamental tener información de calidad que sea analizada adecuadamente, usada eficientemente y difundida oportunamente dentro de las oficinas públicas y entre la ciudadanía.

8. La pandemia ha impactado negativamente en muchos de los factores cuya presencia puede contribuir a la generación de diferentes formas de violencias, y la estrechez fiscal para financiar las políticas públicas constituye uno de los grandes desafíos para los países de la región. En este contexto la información se vuelve más relevante que nunca para acelerar el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, buscando que nadie se quede atrás.



www.latinamerica.undp.org



twitter.com/PNUDLAC



www.facebook.com/pnudlac



www.instagram.com/pnudlac



www.linkedin.com/company/pnudlac



www.youtube.com/PNUDLAC